RADICADO Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00 sustentación de recurso

MARIA ESTHELA PAEZ ALBARADO <mariaestelapaez@hotmail.com>

Lun 26/09/2022 8:04 PM

Para: Secretaria Sala Civil Familia - San Gil - Seccional Bucaramanga <seccivsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Tribunal .pdf;

Honorable Magistrado

JAVIER GONZALEZ SERRANO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SAN GIL

E. S. D.

ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

PROCESO: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO

DEMANDANTE: OMAR CALA SARMIENTO

DEMANDADOS: HEREDEROS INDETERMINADOS DE ISABEL PARRA VIUDA DE SARMIENTO O MARÍA ISABEL PARRA MONSALVE (SIC) Y DEMÁS PERSONAS

INDETERMINADAS

RADICADO Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00

MARÍA ESTHELA PÁEZ ALBARADO, abogada en ejercicio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 37 720.416 de Bucaramanga, inscrita en el registro nacional de abogado con el número 321.487, con correo electrónico mariaestelapaez@hotmail.com, con domicilio profesional en la Oficina 310 de la calle 49 # 8D - 29, Centro Comercial Puerto Real de esta ciudad en implementación del poder conferido por los señores MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA Y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, mayores de edad, identificados en sus órdenes con las cédulas de ciudadanía números C.C. # 63'457.443 y 91'440.230 respectivamente, con domicilio y residencia en la calle 44 # 41 - 94 de la ciudad de Barranquilla (Atl.), en sus condiciones de herederos del señor LUIS EDUARDO SARMIENTO PARRA (Q.E.P.D.), hijo legítimo de la señora ISABEL PARRA VIUDA DE SARMIENTO respetuosamente acudo a su despacho dentro del término previsto por el artículo 12 de la ley 2213 de 20220, para presentar la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fondo proferida por el señor el señor Juez Segundo Civil del Circuito De Socorro - Santander, el dieciséis (16) de septiembre próximo pasado.

Son criterios principales que sustentan la alzada, los que expongo y sustento:

SUSTENTACIÓN

En este punto, debo informar al señor magistrado que presentó la sustentación en tres tópicos, a saber:

1.- NULIDAD PROCESAL INSANEABLE POR FACTOR DE COMPETENCIA FUNCIONAL O SUBJETIVA

Inicio la acometida jurídica a la decisión proferida por el a quo, invocando la causal de nulidad, de falta de competencia el señor Juez Segundo Civil del Circuito de Socorro – Santander, prevista en el artículo 133 del C.G.P., con basamento en los siguientes criterios:

- 1.1.- El numeral 3 del artículo 26 del C.G.P., señala: "3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión de bienes, por el avalúo catastral de estos".
- **1.2.-** Conforme consta en el recibo de impuesto predial del municipio del Hato, identificado con el N° 2109004443 del 21 de octubre de 2.020, alegado por la parte demandante al proceso, el avalúo catastral del predio era de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS** (\$ **44**′**906.00**, **oo**).



1.3.- De acuerdo a lo previsto por el inciso segundo del artículo 25 ibídem, son procesos de menor cuantía aquellos que versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)

- 1.4.- El salario mínimo legal vigente para el año 2.020 era de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCOCIENTOS TRES PESOS (\$ 877.803, oo), lo que indica que la cuantía del proceso por razón del avalúo catastral, era de 51.15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020, correspondiendo, por tanto, la competencia del proceso para ser conocido, a un Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal del municipio del socorro.
- 1.5.- No obstante que el imperio legal así lo establece con perfecta claridad, el proceso se tramito en Juzgado del Circuito; pero, ¿porque sucedió tal situación? En criterio de esta profesional, por una presunta inducción en error de la apoderada del demandante, quien en el acápite denominado "COMPETENCIA Y CUANTÍA", decidió a su arbitrio desatender el mandato legal y nominar la cuantía del inmueble en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150'000.000, oo), porque al decir de ella, "(...) el valor del avalúo catastral es irrisorio (...)"

COMPETENCIA Y CUANTIA

Por la naturaleza del Proceso, lugar de ubicación del Inmueble, cuantía del mismo la cual se estima en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000.00) MCTE, toda vez que el valor del avalúo catastral es irrisorio, y demás factores que la integran, es Usted Señor Juez, competente para conocer de este Proceso.

ANEXOS

- 1.- Poder legalmente conferido.
- 2.- Documentos anunciados.
- 1.6.- Como puede observarse, se desconoció el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio" (Subrayas y negrilla, personales)

Tal como se ha expresado y demostrado, no solo se desatendió el imperio de la ley, sino que se desatendió el precedente jurisprudencial, en particular la sentencia C-537/16, del

cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO, quien expuso:

"La determinación previa y abstracta del juez competente para instruir y decidir un asunto es una competencia normativa atribuida a la Constitución y a la ley37 colombianas 38, para cuyo ejercicio el legislador goza de un margen de configuración normativa amplio39, aunque limitado: a más de los casos en los que directamente es la Constitución la que establece el juez natural de determinado asunto40, así como de la previsión de jurisdicciones especiales, como la indígena41, de las que el respeto de sus competencias es un imperativo constitucional, la determinación legal de la competencia debe ser una decisión razonable y proporcionada42, que implica, por ejemplo, la necesidad de razón suficiente, de especialidad, para que un asunto sea distraído de la jurisdicción ordinaria43 . También existen otros límites como la prohibición de que la determinación del juez competente quede al arbitrio del juez o de las partes44, que los particulares sean juzgados por militares45 (inciso final del artículo 213 de la Constitución) o por autoridades administrativas en materia penal, las que ni siquiera pueden instruir el sumario (inciso 3 del artículo 116, de la Constitución), pero sí pueden actuar como ente acusador46 y ser jueces competentes de otros asuntos47 y la exclusión de que violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal militar48, la que no obstante es, según las circunstancias, juez natural de ciertos comportamientos49. El respeto de los fueros constitucionales también hace parte del derecho al juez natural 50 . Así, dentro del campo de configuración normativo determinado por estos límites, el legislador puede determinar que el "juez natural" de determinado asunto puede ser una autoridad administrativa o una autoridad judicial, tal como lo ha reconocido tanto esta Corte51, como la CIDH52. En el caso de que el juez natural sea un juez, el legislador recurre a una serie de criterios o factores de competencia, los que "tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de justicia" 53

Las características de la competencia de los jueces, han sido identificadas por esta Corte de la siguiente manera:

" (i) **legalidad**, en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de obligatoria observancia y no se puede derogar por la voluntad de las partes; (iii) **modificabilidad**, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del proceso (**perpetuatio jurisdictionis**); (iv) **indelegabilidad**, ya que no puede ser cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v) es de orden público, en razón a

que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general" 54 (negrillas originales)."

Y concluye el magistrado:

"23.En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en los procesos que se rigen por este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo67 y funcional68 son improrrogables (artículo 16), es decir, que la nulidad que su desconocimiento genera es insaneable. En este sentido, la determinación de las formas propias del juicio por parte del legislador consistió en establecer una primera diferencia: la asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunción de competencia con desconocimiento de la competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia." (Subrayas y negrilla, personales)

Por tal razón, conforme se ha expresado, subsiste una nulidad insaneable.

2.- DESATENCIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en Sentencia 11001310301319990755901, nov. 28/13, Magistrada Ponente, Margarita Cabello, estableció: "mientras se tenga el ánimo de heredero, se carece del de señor y dueño, y, así, el tiempo de la primera posesión no es apto para usucapir la cosa, recalcó la corporación". (Negrillas personales)

Bajo este entendido, es evidente que en el expediente no media prueba alguna que demuestre que el demandante haya acreditado haber adquirido por prescripción un bien que pertenece a la masa sucesoral debe probar que lo posee como dueño único, sin reconocer dominio ajeno e inequívoca, pública y pacíficamente y no en calidad de sucesor del causante.

En este aspecto debo resaltar lo que será la siguiente consideración de la sustentación, esto es, la vulneración al debido proceso, en lo que respecta a la desatención de lo

previsto en la ley 2213 de 2.022, al no permitir que mis asistidos integraran la audiencia de instrucción y juzgamiento, por vía virtual.

En efecto, y continuando con la sustentación, el demandante no pudo desligar su condición de heredero por transmisión a partir del cinco (5) de septiembre de 2015, fecha en la que murió su señora madre, señora Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.), como tampoco probó haya tomado posesión material en octubre, dos (2) días después del fallecimiento de la señora Isabel Parra Monsalve, el 29 de septiembre de 1.996, según consta en el registro civil de defunción que él allegó al proceso.

Bajo este entendido, el heredero no acreditó el momento preciso de la interversión del título, es decir, el cambio de la posesión material que ostenta como tal a la del propietario del predio.

Y es que, no podía ostentar posesión material del predio de su abuela, conociendo que su señora madre era heredera, junto a sus tíos, de cuyos hijos ignoró en el proceso, si advertimos que inicialmente la demanda se dirigió contra los herederos indeterminados, mientras que en el plano de la realidad, él sí sostenía comunicación con mis asistidos, quienes no pudieron ratificar y probar ello en audiencia, toda vez que no se cumplió la audiencia virtual tal como lo preceptúa, repito, la ley 2213/22.

En este orden de ideas, es notorio que el demandante Omar Cala Sarmiento, solo adquirió la calidad de poseedor regular del predio, en el momento preciso en que su señora Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.), heredera directa de la señora Isabel Parra Monsalve, falleció, esto es, el cinco (5) de septiembre de 2015, por lo que al momento de interponer la acción solo habían transcurrido 4 años y algunos meses solamente.

3.- VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INAPLICACIÓN DE LA VIRTUALIDAD EN PERJUICIO DE MI ASISTIDOS, SEÑORES MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA.

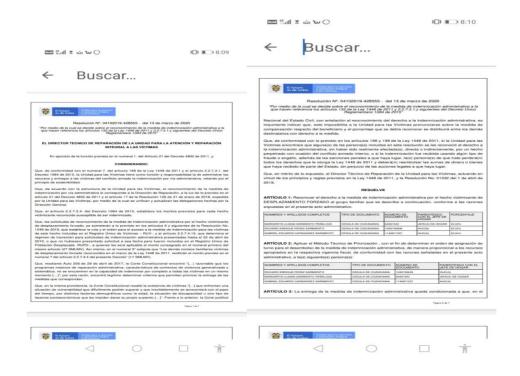
En efecto, con la advenimiento de la pandemia del Covid, se sabe que el desarrollo de sistema judicial, se modificó, para ajustarse a las necesidades que la situación de emergencia requería; es así que el presidente de entonces, profirió el Decreto Ley 806 de 2.020 a través del cual implemento el uso de las tecnologías digitales, creando la virtualidad del sistema judicial.

Cumplida su vigencia de dos año, el legislador expidió la ley 2213 de 2.022 que estableció la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan

medidas para implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.

Es así como el inciso segundo del artículo 1° de dicha normativa consagra: "Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia"

Mis representados, señores MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, son personas en condición de desplazamiento, reconocidos por el Estado como tal, residentes en la ciudad de Barranquilla, quienes por su precaria condición económica, no podía asistir a la diligencia programada para el 16 de septiembre de 2.022.



A su turno el parágrafo 1° del artículo 2° dispone: "Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos" y el artículo 7°, señala: "Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica.

Cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente lo requieran, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas. la práctica presencial de la prueba se dispondrá por el juez de oficio o por solicitud motivada de cualquiera de las partes. Las partes que no deban declarar, los terceros e intervinientes especiales y demás sujetos del proceso, quienes además podrán concurrir de manera virtual."

Es evidente entonces que se desatendió lo dispuesto en la ley y al no hacerse la audiencia tal como lo señala la ley 2213 de 2022, se le vulnero el derecho de contradicción defensa, habida razón, de que no pudo exponer en el interrogatorio del artículo 372, la consideraciones fácticas que llevaran a demostrar que entre ellos y su primo demandante, si había existido comunicación respecto del proceso de sucesión.

Así las cosas, considero que las anteriores razonansas son suficientes para edificar la petición que seguidamente preciso.

PETICIÓN

Con fundamento en las anteriores razonansas, solicito al Honorable Magistrado Javier González Serrano, Tribunal Superior Distrito Judicial De San Gil, Sala Civil – Familia:

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el señor el señor Juez Segundo Civil del Circuito De Socorro – Santander, el dieciséis (16) de septiembre de 2.022, dentro del proceso de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, siendo demandante: Omar Cala Sarmiento y demandados: Herederos Indeterminados De Isabel Parra Viuda De Sarmiento O María Isabel Parra Monsalve (Sic) y demás personas indeterminadas Radicado Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00 y a través de la cual se Declaró infundada la oposición efectuada por los herederos determinados MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, y como consecuencia de ello, se dispuso declarar que OMAR CALA SARMIENTO había adquirido por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el bien inmueble:

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que la nulidad por carecer de competencia el señor Juez Segundo Civil del Circuito de Socorro -Santander

TERCERO: Que en el evento que el honorable magistrado se aparte de la anterior consideración, se revoque la sentencia y en su defecto se declare que no se probaron las condiciones objetivas ni subjetivas para que opere la Prescripción Extraordinaria

Adquisitiva de Dominio en cabeza del demandante, quien por su calidad de hijo de Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.) directa de la señora Isabel Parra Monsalve, fallecida el 29 de septiembre de 1.996, solo adquirió la calidad de poseedor regular del predio, en el momento preciso en que su señora madre falleció, esto es, el cinco (5) de septiembre de 2015.

ANEXOS

Adoso en PDF:

- Copia resolución que los reconoce como desplazados.
- Pantallazos de conversaciones vía whatsapp que prueban en 2.018 se hicieron conversaciones entre el demandante y mis clientes, respecto del proceso de sucesión.
- Imagen de los documentos que, a la fecha del 2018, mi representada la señora MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA, solicito personalmente, con el fin de reunirlos para iniciar la sucesión y que consta que ella estuvo en el hato en esos días, en conversaciones con su primo OMAR CALA.
- Solicito respetuosamente, sea escuchada la versión de mis representados, MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA en donde se podrá establecer con claridad que sí, habían un acuerdo entre las partes para iniciar una sucesión, y que el señor Omar Cala, vulnero la buena fe, de ellos, manifestando que iba a reunir a la familia para proceder, cosa que nunca hizo, aprovechando la lejanía y dificultad económica de sus familiares, que les impedía estar a pendiente de la situación.
- De igual manera le solicito sea escucha la señora ELIZABETH NAVARRO VESGA, identificada con cedula de ciudadanía numero 28.185.004 testigo de los hechos, quien, por motivos ajenos a su voluntad, había perdido comunicación con mis representados y que en este momento habiendo restablecido comunicación, puede declarar todo lo que a ella le consta, pues vive en la calle 5 #4 -36 Hato Santander, y numero de contacto 3124928774.

Con altísima consideración,

MARÍA ESTHELA PAEZ ALBARAD C.C. # 37′720.416 de Bucaramanga T.P. # 321.487 del C.S. de la J.

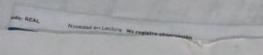


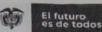




	2288 13 38 9 Forma DANE IP 25 1
. 5	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
INDICAT SERV	1801865 REGISTRO DE DEFUNCION 28 DICTEMBRE
OFICINA REGIST	DE (4) Clase (notaria, alcaldis, inspección, etc.)
	SARMIENTO PARRA LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO
DATOS	No. FECHA DE NACIMIENTO 13 Dia 13 Departamento o país si no es Colombia HATO .
DEL	(6) Indicativo serial o folio No. 127 Officina de registro
	2) Sexo Masculino X 1
	LUGAR DE LA DEFUNCION [27] Insp. policia o corregimiento
	29 Pais 29 Departmento
	FECHA Y HORA DE LA DEFUNCION INDÍQUE LA CAUSA DEL DECESO
	(a) DIa (2) Mes (20) Ano (31) Hora (32)
DATOS	MA Charles No.
DE LA DEFUNCIO	S remines y expenses our money que comme
	Dr. JAINE FAILLAGE C
	39 Juzgado que profiere la sentencia
	Documento presentado Certificación médica Orden judicial Autorización judicial 3
PADHE	FRANCISCO SARMIENTO
MADRE	ONTORBEL OPPARRA
	Nombres y apellidos Identificación
CONYUGE	RODA VERGARA
DATOS DEL	NORTHE Y ARTICOAREZ Yas Firma y documento de Mentinfacion
DENUN- CIANTE	C.C. No. 13/561-578
	4) Nombres y apellidos
DATOS	CC. No.
	Dirección 5) Firma y documento de identificación
DATOS	Notaria 3º del Circulo - CC. No. Co. de
DEL	2 Direction SS Chart
DURLICA	
DUPLICA	DO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE INSCRIPCION Firma (autógrafa) y sello del tuyclorazio ente quier se hace el

io: cruzh Fecha: 17/Mayo/2018 Hora: 15:20:23 Página 1





Bogotá, Miércoles 30 de Octubre de 2019

Señor(a)
MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA Direción: CL 44-44 103 Teléfono: 3146040790 BARRANQUILLA, ATLANTICO

Consultando el Registro Único de Victimas (RUV) el día Miércoles 30 de Octubre de 2019, nos permitimos informar el estado y hecho(s) victimizante(s) por el cual se encuentra registrado(a). MARGARITA LILIANA SARMIENTO PENALOZA identificado(a) con cédula de ciudadanía 63457443, en calidad de declarante y/o jefe de hogar:

DECLARACION ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(S)	FECHADEU SECHO	DEPARTAMENTO DE HECHO	MUNICIPIO HECHO
752901 752901 (SIPOD) *	Incluido	Desplazamiento Forzado	15/12/2004	SANTANDER (68)	BARRANCABERMEJA

Que dentro de la declaración rendida 752901 y el hecho victimizante Desplazamiento Forzado, se evidencia la relación del siguiente

NOMBRES Y APELLIDOS	RELACION CON DECLARANTE	DOMESTICS OF THE PARTY OF THE P	ESTADON/ALCENCION	FECHA DEL HECHO VICTIMIZANTE
MARGARITA LILIANA SARMIENTO RENALCZA	Hijo(a)/Hijastro(a)	1045745639	Incluido	12/15/2004
GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	- Star (commente)	63457443	Incluido	12/15/2004
OLIVALING TOTAL	Hijo(a)/Hijastro(a)	11/10871237	Incluido	12/15/2004

Código Verificación: 2019103012054382

Debe tener en cuenta que la conformación del grupo familiar inscrito en el Registro Único de Victimas está determinado por la información que de manera libre y voluntaria realizó la persona que declaró ante el Ministerio Público. De esta manera, el grupo familiar queda registrado tal y como lo expresó el (la) declarante, quien lo conformó, basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes.

De conformidad con el Artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Victima y aquella relacionada con la solicitud de Registro es de carácter RESERVADO, citado en el parágrafo 1º del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011; de igual manera el artículo 31 del decreto 4800 en su numeral noveno señala: "Garentizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para si o para terceros".

Conforme a lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Verificacion: 2019103012054382 Usuario: 64532 Fecha: 30/10/2019 12:05

Pag: 1 c



← Buscar...



Resolución Nº. 04102019-428555 - del 13 de marzo de 2020

"Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico Reglamentario 1084 de 2015"

COMPLETOS		DOCUMENTO	JEFE DE HOGAR	FALLECIDA
RICHARD ENRIQUE PEREZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1045745639	HIJO(A)	NO.
MARGARITA LILIANA SARMIENTO PENALOZA	CEDULA DE CIUDADANIA	63457443	JEFE(A) DE HOGAR	NO
GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1140871237	HIJO(A)	NO

Que, al consultar el Registro Único de Víctimas se tiene que, a la fecha de expedición del presente acto administrativo, las personas descritas se encuentran incluidos.

Que, realizado el estudio de la solicitud, se determinó que cumple con los supuestos fácticos y jurídicos para reconocer el derecho a la medida de indemnización administrativa, por lo que, se procederá al reconocimiento de la medida por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, distribuida así:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR	PORCENTAJE
MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA	CEDULA DE CIUDADANIA	63457443	JEFE(A) DE HOGAR	33.33%
RICHARD ENRIQUE PEREZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1045745639	HLIG(A)	33.33%
GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1140871237	HUO(A)	33.34%

Que, el porcentaje otorgado tiene como sustento las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.7.4.8 del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, norma que regula la distribución del porcentaje a reconocer a los destinatarios con derecho a recibir la medida de indemnización administrativa

"Artículo 2.2.7.4.8. Distribución de la indemnización. La Indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima de desplazamiento forzado, incluidos en el Registro Único de Víctimas – RUV [...]".

Que, a la luz del artículo citado 2.2.7.4.10 del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, es preciso indicar que el monto correspondiente a la medida de indemnización administrativa del presente caso será de 27 SMLMV.

Que en el parágrafo 2 del artículo 2.2.7.3.4, se definió "[...] Si respecto de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se acumule hasta un monto de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales [...]".

Que, siguiendo con la verificación de los sistemas de información se logró constatar que los destinatarios de la indemnización administrativa no acreditaron alguna situación de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, que demuestren que se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para la priorización de la entrega de la medida, es decir que, no se acreditó que contaran con una discapacidad para el desempeño o una enfermedad catastrófica o de alto costo, como tampoco se logró identificar que tuviesen más de 74 años, por lo que, se dará aplicación al inciso 3 del artículo 14 de esta misma Resolución que dispone:

RV: RADICADO Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00 sustentación de recurso

MARIA ESTHELA PAEZ ALBARADO <mariaestelapaez@hotmail.com>

Lun 5/12/2022 9:49 PM

Para: Secretaria Sala Civil Familia - San Gil - Seccional Bucaramanga <seccivsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB) Tribunal .pdf;

Buen día,

De la manera mas atenta y respetuosa, me permito enviar nuevamente sustentación del recurso, toda vez que, hasta la fecha, no he recibido ninguna información o notificación del proceso, o del recurso realizado, a mi correo electrónico o dirección de notificación.

Agradeciendo su labor y atención,

atte

MARIA ESTHELA PAEZ A Abogada

De: MARIA ESTHELA PAEZ ALBARADO

Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 8:04 p.m.

Para: seccivsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co <seccivsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co> **Asunto:** RADICADO №: 68-755-31-13-002-2020-00117-00 sustentación de recurso

Honorable Magistrado

JAVIER GONZALEZ SERRANO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SAN GIL

E. S. D.

ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

PROCESO: PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO

DEMANDANTE: OMAR CALA SARMIENTO

DEMANDADOS: HEREDEROS INDETERMINADOS DE ISABEL PARRA VIUDA DE SARMIENTO O MARÍA ISABEL PARRA MONSALVE (SIC) Y DEMÁS PERSONAS

INDETERMINADAS

RADICADO Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00

MARÍA ESTHELA PÁEZ ALBARADO, abogada en ejercicio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 37 720.416 de Bucaramanga, inscrita en el registro nacional de abogado con el número 321.487, con correo electrónico mariaestelapaez@hotmail.com, con domicilio profesional en la Oficina 310 de la calle 49 # 8D - 29, Centro Comercial Puerto Real de esta ciudad en implementación del poder conferido por los señores MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA Y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, mayores de edad, identificados en sus órdenes con las cédulas de ciudadanía números C.C. # 63'457.443 y 91'440.230 respectivamente, con domicilio y residencia en la calle 44 # 41 - 94 de la ciudad de Barranquilla (Atl.), en sus condiciones de herederos del señor LUIS EDUARDO SARMIENTO PARRA (Q.E.P.D.), hijo legítimo de la señora ISABEL PARRA VIUDA DE SARMIENTO respetuosamente acudo a su despacho dentro del término previsto por el artículo 12 de la ley 2213 de 20220, para presentar la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fondo proferida por el señor el señor Juez Segundo Civil del Circuito De Socorro - Santander, el dieciséis (16) de septiembre próximo pasado.

Son criterios principales que sustentan la alzada, los que expongo y sustento:

SUSTENTACIÓN

En este punto, debo informar al señor magistrado que presentó la sustentación en tres tópicos, a saber:

1.- NULIDAD PROCESAL INSANEABLE POR FACTOR DE COMPETENCIA FUNCIONAL O SUBJETIVA

Inicio la acometida jurídica a la decisión proferida por el a quo, invocando la causal de nulidad, de falta de competencia el señor Juez Segundo Civil del Circuito de Socorro – Santander, prevista en el artículo 133 del C.G.P., con basamento en los siguientes criterios:

- 1.1.- El numeral 3 del artículo 26 del C.G.P., señala: "3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión de bienes, por el avalúo catastral de estos".
- **1.2.-** Conforme consta en el recibo de impuesto predial del municipio del Hato, identificado con el N° 2109004443 del 21 de octubre de 2.020, alegado por la parte demandante al proceso, el avalúo catastral del predio era de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS** (\$ **44**′**906.00**, **oo**).



1.3.- De acuerdo a lo previsto por el inciso segundo del artículo 25 ibídem, son procesos de menor cuantía aquellos que versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)

- 1.4.- El salario mínimo legal vigente para el año 2.020 era de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCOCIENTOS TRES PESOS (\$ 877.803, oo), lo que indica que la cuantía del proceso por razón del avalúo catastral, era de 51.15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020, correspondiendo, por tanto, la competencia del proceso para ser conocido, a un Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal del municipio del socorro.
- 1.5.- No obstante que el imperio legal así lo establece con perfecta claridad, el proceso se tramito en Juzgado del Circuito; pero, ¿porque sucedió tal situación? En criterio de esta profesional, por una presunta inducción en error de la apoderada del demandante, quien en el acápite denominado "COMPETENCIA Y CUANTÍA", decidió a su arbitrio desatender el mandato legal y nominar la cuantía del inmueble en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150'000.000, oo), porque al decir de ella, "(...) el valor del avalúo catastral es irrisorio (...)"

COMPETENCIA Y CUANTIA

Por la naturaleza del Proceso, lugar de ubicación del Inmueble, cuantía del mismo la cual se estima en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 150.000.000.00) MCTE, toda vez que el valor del avalúo catastral es irrisorio, y demás factores que la integran, es Usted Señor Juez, competente para conocer de este Proceso.

ANEXOS

- 1.- Poder legalmente conferido.
- 2.- Documentos anunciados.
- 1.6.- Como puede observarse, se desconoció el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio" (Subrayas y negrilla, personales)

Tal como se ha expresado y demostrado, no solo se desatendió el imperio de la ley, sino que se desatendió el precedente jurisprudencial, en particular la sentencia C-537/16, del

cinco (5) de octubre de dos mil dieciséis (2016), Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO, quien expuso:

"La determinación previa y abstracta del juez competente para instruir y decidir un asunto es una competencia normativa atribuida a la Constitución y a la ley37 colombianas 38, para cuyo ejercicio el legislador goza de un margen de configuración normativa amplio39, aunque limitado: a más de los casos en los que directamente es la Constitución la que establece el juez natural de determinado asunto40, así como de la previsión de jurisdicciones especiales, como la indígena41, de las que el respeto de sus competencias es un imperativo constitucional, la determinación legal de la competencia debe ser una decisión razonable y proporcionada42, que implica, por ejemplo, la necesidad de razón suficiente, de especialidad, para que un asunto sea distraído de la jurisdicción ordinaria43 . También existen otros límites como la prohibición de que la determinación del juez competente quede al arbitrio del juez o de las partes44, que los particulares sean juzgados por militares45 (inciso final del artículo 213 de la Constitución) o por autoridades administrativas en materia penal, las que ni siquiera pueden instruir el sumario (inciso 3 del artículo 116, de la Constitución), pero sí pueden actuar como ente acusador46 y ser jueces competentes de otros asuntos47 y la exclusión de que violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal militar48, la que no obstante es, según las circunstancias, juez natural de ciertos comportamientos49. El respeto de los fueros constitucionales también hace parte del derecho al juez natural 50 . Así, dentro del campo de configuración normativo determinado por estos límites, el legislador puede determinar que el "juez natural" de determinado asunto puede ser una autoridad administrativa o una autoridad judicial, tal como lo ha reconocido tanto esta Corte51, como la CIDH52. En el caso de que el juez natural sea un juez, el legislador recurre a una serie de criterios o factores de competencia, los que "tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de justicia" 53

Las características de la competencia de los jueces, han sido identificadas por esta Corte de la siguiente manera:

" (i) **legalidad**, en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de obligatoria observancia y no se puede derogar por la voluntad de las partes; (iii) **modificabilidad**, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del proceso (**perpetuatio jurisdictionis**); (iv) **indelegabilidad**, ya que no puede ser cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v) es de orden público, en razón a

que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general" 54 (negrillas originales)."

Y concluye el magistrado:

"23.En desarrollo de esta competencia, mediante la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, el legislador estableció el régimen de las nulidades procesales en los procesos que se rigen por este Código y dispuso que la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo67 y funcional68 son improrrogables (artículo 16), es decir, que la nulidad que su desconocimiento genera es insaneable. En este sentido, la determinación de las formas propias del juicio por parte del legislador consistió en establecer una primera diferencia: la asunción de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunción de competencia con desconocimiento de la competencia de la jurisdicción y de los factores subjetivo y funcional, sí genera necesariamente nulidad de la sentencia." (Subrayas y negrilla, personales)

Por tal razón, conforme se ha expresado, subsiste una nulidad insaneable.

2.- DESATENCIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en Sentencia 11001310301319990755901, nov. 28/13, Magistrada Ponente, Margarita Cabello, estableció: "mientras se tenga el ánimo de heredero, se carece del de señor y dueño, y, así, el tiempo de la primera posesión no es apto para usucapir la cosa, recalcó la corporación". (Negrillas personales)

Bajo este entendido, es evidente que en el expediente no media prueba alguna que demuestre que el demandante haya acreditado haber adquirido por prescripción un bien que pertenece a la masa sucesoral debe probar que lo posee como dueño único, sin reconocer dominio ajeno e inequívoca, pública y pacíficamente y no en calidad de sucesor del causante.

En este aspecto debo resaltar lo que será la siguiente consideración de la sustentación, esto es, la vulneración al debido proceso, en lo que respecta a la desatención de lo

previsto en la ley 2213 de 2.022, al no permitir que mis asistidos integraran la audiencia de instrucción y juzgamiento, por vía virtual.

En efecto, y continuando con la sustentación, el demandante no pudo desligar su condición de heredero por transmisión a partir del cinco (5) de septiembre de 2015, fecha en la que murió su señora madre, señora Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.), como tampoco probó haya tomado posesión material en octubre, dos (2) días después del fallecimiento de la señora Isabel Parra Monsalve, el 29 de septiembre de 1.996, según consta en el registro civil de defunción que él allegó al proceso.

Bajo este entendido, el heredero no acreditó el momento preciso de la interversión del título, es decir, el cambio de la posesión material que ostenta como tal a la del propietario del predio.

Y es que, no podía ostentar posesión material del predio de su abuela, conociendo que su señora madre era heredera, junto a sus tíos, de cuyos hijos ignoró en el proceso, si advertimos que inicialmente la demanda se dirigió contra los herederos indeterminados, mientras que en el plano de la realidad, él sí sostenía comunicación con mis asistidos, quienes no pudieron ratificar y probar ello en audiencia, toda vez que no se cumplió la audiencia virtual tal como lo preceptúa, repito, la ley 2213/22.

En este orden de ideas, es notorio que el demandante Omar Cala Sarmiento, solo adquirió la calidad de poseedor regular del predio, en el momento preciso en que su señora Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.), heredera directa de la señora Isabel Parra Monsalve, falleció, esto es, el cinco (5) de septiembre de 2015, por lo que al momento de interponer la acción solo habían transcurrido 4 años y algunos meses solamente.

3.- VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR INAPLICACIÓN DE LA VIRTUALIDAD EN PERJUICIO DE MI ASISTIDOS, SEÑORES MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA.

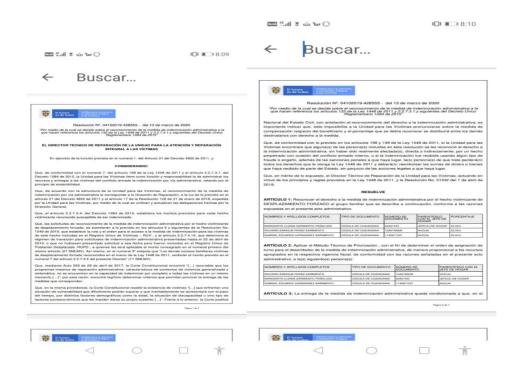
En efecto, con la advenimiento de la pandemia del Covid, se sabe que el desarrollo de sistema judicial, se modificó, para ajustarse a las necesidades que la situación de emergencia requería; es así que el presidente de entonces, profirió el Decreto Ley 806 de 2.020 a través del cual implemento el uso de las tecnologías digitales, creando la virtualidad del sistema judicial.

Cumplida su vigencia de dos año, el legislador expidió la ley 2213 de 2.022 que estableció la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan

medidas para implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.

Es así como el inciso segundo del artículo 1° de dicha normativa consagra: "Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia"

Mis representados, señores MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, son personas en condición de desplazamiento, reconocidos por el Estado como tal, residentes en la ciudad de Barranquilla, quienes por su precaria condición económica, no podía asistir a la diligencia programada para el 16 de septiembre de 2.022.



A su turno el parágrafo 1° del artículo 2° dispone: "Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos" y el artículo 7°, señala: "Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica.

Cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente lo requieran, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas. la práctica presencial de la prueba se dispondrá por el juez de oficio o por solicitud motivada de cualquiera de las partes. Las partes que no deban declarar, los terceros e intervinientes especiales y demás sujetos del proceso, quienes además podrán concurrir de manera virtual."

Es evidente entonces que se desatendió lo dispuesto en la ley y al no hacerse la audiencia tal como lo señala la ley 2213 de 2022, se le vulnero el derecho de contradicción defensa, habida razón, de que no pudo exponer en el interrogatorio del artículo 372, la consideraciones fácticas que llevaran a demostrar que entre ellos y su primo demandante, si había existido comunicación respecto del proceso de sucesión.

Así las cosas, considero que las anteriores razonansas son suficientes para edificar la petición que seguidamente preciso.

PETICIÓN

Con fundamento en las anteriores razonansas, solicito al Honorable Magistrado Javier González Serrano, Tribunal Superior Distrito Judicial De San Gil, Sala Civil – Familia:

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el señor el señor Juez Segundo Civil del Circuito De Socorro – Santander, el dieciséis (16) de septiembre de 2.022, dentro del proceso de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, siendo demandante: Omar Cala Sarmiento y demandados: Herederos Indeterminados De Isabel Parra Viuda De Sarmiento O María Isabel Parra Monsalve (Sic) y demás personas indeterminadas Radicado Nº: 68-755-31-13-002-2020-00117-00 y a través de la cual se Declaró infundada la oposición efectuada por los herederos determinados MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO SARMIENTO PEÑALOZA, y como consecuencia de ello, se dispuso declarar que OMAR CALA SARMIENTO había adquirido por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el bien inmueble:

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que la nulidad por carecer de competencia el señor Juez Segundo Civil del Circuito de Socorro -Santander

TERCERO: Que en el evento que el honorable magistrado se aparte de la anterior consideración, se revoque la sentencia y en su defecto se declare que no se probaron las condiciones objetivas ni subjetivas para que opere la Prescripción Extraordinaria

Adquisitiva de Dominio en cabeza del demandante, quien por su calidad de hijo de Carmen Sarmiento Parra (q.e.p.d.) directa de la señora Isabel Parra Monsalve, fallecida el 29 de septiembre de 1.996, solo adquirió la calidad de poseedor regular del predio, en el momento preciso en que su señora madre falleció, esto es, el cinco (5) de septiembre de 2015.

ANEXOS

Adoso en PDF:

Copia resolución que los reconoce como desplazados.

Pantallazos de conversaciones vía whatsapp que prueban en 2.018 se hicieron conversaciones entre el demandante y mis clientes, respecto del proceso de

sucesión.

Imagen de los documentos que, a la fecha del 2018, mi representada la señora

MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA, solicito personalmente, con el

fin de reunirlos para iniciar la sucesión y que consta que ella estuvo en el hato en

esos días, en conversaciones con su primo OMAR CALA.

Solicito respetuosamente, sea escuchada la versión de mis representados,
 MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA y JAIME HUMBERTO

SARMIENTO PEÑALOZA en donde se podrá establecer con claridad que sí,

habían un acuerdo entre las partes para iniciar una sucesión, y que el señor Omar

Cala, vulnero la buena fe, de ellos, manifestando que iba a reunir a la familia para

proceder, cosa que nunca hizo, aprovechando la lejanía y dificultad económica

de sus familiares, que les impedía estar a pendiente de la situación.

De igual manera le solicito sea escucha la señora ELIZABETH NAVARRO

VESGA, identificada con cedula de ciudadanía numero 28.185.004 testigo de los

hechos, quien, por motivos ajenos a su voluntad, había perdido comunicación con

mis representados y que en este momento habiendo restablecido comunicación,

puede declarar todo lo que a ella le consta, pues vive en la calle 5 #4 -36 Hato

Santander, y numero de contacto 3124928774.

Con altísima consideración,

MARIA ESTHELA PAEZ ALBARAD C.C. # 37′720.416 de Bucaramanga

T.P. # 321.487 del C.S. de la J.

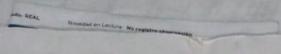






	2288 13 38 9 Forma DANE IP 25 1
. 5	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
INDICAT SERV	1801865 REGISTRO DE DEFUNCION 28 DICTEMBRE
OFICINA REGIST	DE (4) Clase (notaria, alcaldis, inspección, etc.)
	SARMIENTO PARRA LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO
DATOS	No. FECHA DE NACIMIENTO 13 Dia 13 Departamento o país si no es Colombia HATO .
DEL	(6) Indicativo serial o folio No. 127 Officina de registro
	2) Sexo Masculino X 1
	LUGAR DE LA DEFUNCION [27] Insp. policia o corregimiento
	29 Pais 29 Departmento
	FECHA Y HORA DE LA DEFUNCION INDÍQUE LA CAUSA DEL DECESO
	(a) DIa (2) Mes (20) Ano (31) Hora (32)
DATOS	MA Charles No.
DE LA DEFUNCIO	S remines y expenses our money que comme
	Dr. JAINE FAILLAGE C
	39 Juzgado que profiere la sentencia
	Documento presentado Certificación médica Orden judicial Autorización judicial 3
PADHE	FRANCISCO SARMIENTO
MADRE	ONTORBEL OPPARRA
	Nombres y apellidos Identificación
CONYUGE	RODA VERGARA
DATOS DEL	NORTHE Y ARTICOAREZ Yas Firma y documento de Mentinfacion
DENUN- CIANTE	C.C. No. 13/561-578
	4) Nombres y apellidos
DATOS	CC. No.
	Dirección 5) Firma y documento de identificación
DATOS	Notaria 3º del Circulo - CC. No. Co. de
DEL	2 Direction SS Chart
DURLICA	
DUPLICA	DO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE INSCRIPCION Firma (autógrafa) y sello del tuyclorazio ente quier se hace el

io: cruzh Fecha: 17/Mayo/2018 Hora: 15:20:23 Página 1





Bogotá, Miércoles 30 de Octubre de 2019

Señor(a)
MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA Direción: CL 44-44 103 Teléfono: 3146040790 BARRANQUILLA, ATLANTICO

Consultando el Registro Único de Victimas (RUV) el día Miércoles 30 de Octubre de 2019, nos permitimos informar el estado y hecho(s) victimizante(s) por el cual se encuentra registrado(a). MARGARITA LILIANA SARMIENTO PENALOZA identificado(a) con cédula de ciudadanía 63457443, en calidad de declarante y/o jefe de hogar:

DECLARACION ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(S)	FECHADEU SECHO	DEPARTAMENTO DE HECHO	MUNICIPIO HECHO
752901 752901 (SIPOD) *	Incluido	Desplazamiento Forzado	15/12/2004	SANTANDER (68)	BARRANCABERMEJA

Que dentro de la declaración rendida 752901 y el hecho victimizante Desplazamiento Forzado, se evidencia la relación del siguiente

NOMBRES Y APELLIDOS	BHEAGIGN CONTRACTOR	NATIONAL PROPERTY.	In the same of the	Con the second s
RICHARD ENRIQUE PEREZ SARMIENTO MARGARITA LILIANA SARMIENTO PENALOZA	Hijo(a)/Hjastro(a)	1045745639	Incluido	FECHADEL HEGHO VIOTIMIZANTE
GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	- Ser (Commented)	63457443	Incluido	12/15/2004
	Hjo(a)/Hijastro(a)	1140871237	Incluido	12/15/2004

Código Verificación: 2019103012054382

Debe tener en cuenta que la conformación del grupo familiar inscrito en el Registro Único de Victimas está determinado por la información que de manera libre y voluntaria realizó la persona que declaró ante el Ministerio Público. De esta manera, el grupo familiar queda registrado tal y como lo expresó el (la) declarante, quien lo conformó, basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes.

De conformidad con el Artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Victima y aquella relacionada con la solicitud de Registro es de carácter RESERVADO, citado en el parágrafo 1º del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011; de igual manera el artículo 31 del decreto 4800 en su numeral noveno señala: "Garentizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para si o para terceros".

Conforme a lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Verificacion: 2019103012054382 Usuario: 64532 Fecha: 30/10/2019 12:05

Pag: 1 c



← Buscar...



Resolución Nº. 04102019-428555 - del 13 de marzo de 2020

"Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico Reglamentario 1084 de 2015"

COMPLETOS		DOCUMENTO	JEFE DE HOGAR	FALLECIDA
RICHARD ENRIQUE PEREZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1045745639	HIJO(A)	NO
MARIGARITA LILIANA SARMIENTO PENALOZA	CEDULA DE CIUDADANIA	63457443	JEFE(A) DE HOGAR	NO
GABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	CEDULA DE GIUDADANIA	1140871237	HUO(A)	NO

Que, al consultar el Registro Único de Víctimas se tiene que, a la fecha de expedición del presente acto administrativo, las personas descritas se encuentran incluidos.

Que, realizado el estudio de la solicitud, se determinó que cumple con los supuestos fácticos y jurídicos para reconocer el derecho a la medida de indemnización administrativa, por lo que, se procederá al reconocimiento de la medida por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, distribuida así:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR	PORCENTAJE
MARGARITA LILIANA SARMIENTO PEÑALOZA	CEDULA DE CIUDADANIA	63457443	JEFE(A) DE HOGAR	33.33%
RICHARD ENRIQUE PEREZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1045745639	HLIG(A)	33.33%
SABRIEL EDUARDO HERNANDEZ SARMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA	1140871237	HUC(A)	33.34%

Que, el porcentaje otorgado tiene como sustento las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.7.4.8 del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, norma que regula la distribución del porcentaje a reconocer a los destinatarios con derecho a recibir la medida de indemnización administrativa

"Artículo 2.2.7.4.8. Distribución de la indemnización. La Indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del núcleo familiar víctima de desplazamiento forzado, incluídos en el Registro Único de Víctimas – RUV [...]".

Que, a la luz del artículo citado 2.2.7.4.10 del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, es preciso indicar que el monto correspondiente a la medida de indemnización administrativa del presente caso será de 27 SMLMV.

Que en el parágrafo 2 del artículo 2.2.7.3.4, se definió "[...] Si respecto de una misma víctima concurre más de una violación de aquellas establecidas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, tendrá derecho a que el monto de la indemnización administrativa se acumule hasta un monto de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales [...]".

Que, siguiendo con la verificación de los sistemas de información se logró constatar que los destinatarios de la indemnización administrativa no acreditaron alguna situación de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, que demuestren que se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para la priorización de la entrega de la medida, es decir que, no se acreditó que contaran con una discapacidad para el desempeño o una enfermedad catastrófica o de alto costo, como tampoco se logró identificar que tuviesen más de 74 años, por lo que, se dará aplicación al inciso 3 del artículo 14 de esta misma Resolución que dispone: